

MINUTA PROYECTO LEY QUE CREA LA AGENCIA DE FUTURO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO

La creación de una institucionalidad dedicada a la prospectiva y el desarrollo sostenible responde a una necesidad ampliamente diagnosticada en el país: Chile carece de un organismo capaz de anticipar, de manera sistemática y técnica, los escenarios futuros que incidirán en su desarrollo económico, social y en su seguridad. Las políticas públicas, en general, se han visto condicionadas por horizontes de corto plazo y por la falta de herramientas que permitan proyectar transformaciones estructurales como la transición energética, el impacto de la inteligencia artificial, el envejecimiento poblacional o la gestión de crisis medioambientales. La ausencia de un ente articulador con capacidad de integrar información técnica y producir lineamientos de largo alcance ha dificultado la continuidad de políticas estratégicas entre gobiernos y ha impedido consolidar una visión compartida de país. Este proyecto busca precisamente subsanar esa falencia, estableciendo un marco institucional que permita al Estado actuar con previsión, coherencia y sustentabilidad frente a los desafíos del siglo XXI.

En ese contexto, la iniciativa contenida en el Boletín 16.441-19, que propone la creación de una Agencia de Futuro Estratégico y Desarrollo conformada por un Consejo Nacional de carácter técnico, orientada a articular políticas de largo plazo en línea con principios de desarrollo sostenible, bajo el amparo del Ministerio de Ciencia y vinculada inicialmente al Ministerio del Interior, ha sido objeto de un amplio debate. El proyecto pretende superar la limitada capacidad de planificación que implica la lógica gubernamental de corto plazo, estableciendo una institucionalidad que reúna antecedentes prospectivos sistemáticos, integradores y vinculantes para las políticas públicas, contribuyendo finalmente a asegurar respuestas coordinadas y anticipadas ante retos como la transición energética, la innovación tecnológica, la transformación demográfica y la seguridad. Hasta ahora ha completado el primer trámite constitucional y fue aprobado en general por la Comisión Desafíos del Futuro, en condiciones de ser remitido a Sala del Senado.

Durante las sesiones preparatorias, se ha desarrollado la discusión en particular, con intensas intervenciones de parlamentarios y expertos. Se reclamó con insistencia la necesidad de precisar con mayor claridad los poderes de la agencia y asegurar su independencia frente al Ejecutivo. El eje más controversial ha sido la autonomía institucional versus dependencia política. El Ejecutivo sostiene que vincular la Agencia al Ministerio del Interior serviría para dotarla de músculo ejecutivo y garantizar coordinación intersectorial efectiva, permitiéndole acceder a información sensible en materias como seguridad pública y orden interno. En contraposición,

Senadores de oposición y expertos han advertido que subordinar esta nueva institucionalidad a una cartera política compromete su imparcialidad técnica y puede transformarla en un instrumento normativo con sesgos partidistas. Proponen su dependencia directa de la Secretaría General de la Presidencia o incluso una configuración autónoma, sin dependencia ministerial, con atribuciones garantizadas por ley para producir informes independientes y vinculantes.

El segundo ámbito de controversia ha consistido en el enfoque sustantivo del proyecto, limitado en su redacción inicial a ciencia y tecnología como eje central. Académicos de Universidades regionales, representantes de think tanks como CEP y Espacio Público y exministros como Sergio Bitar y Andrés Couve han expuesto en audiencias que el desarrollo sostenible requiere integrar dimensiones económicas, sociales, territoriales y de seguridad. Su crítica sostiene que una visión reducida al ámbito científico-tecnológico imposibilita abordar desafíos sistémicos como cambio climático, planificación territorial, ciberseguridad o procesos urbanos estratégicos. En ese sentido, pidieron incorporar explícitamente en el objeto institucional variables vinculadas a desarrollo económico, equidad territorial y resiliencia ante riesgos, para convertir la nueva agencia en un instrumento realmente multisectorial y con capacidad de influir en políticas de Estado.

Una tercera tensión ha surgido respecto a la composición del Consejo Nacional. La iniciativa original consideraba un consejo integrado por quince miembros designados mayoritariamente por el Ejecutivo, con criterios de paridad y representación académica. No obstante, tanto Senadores oficialistas como de oposición han planteado limitar ese número a siete, imponiendo además mecanismos de nombramiento que incorporen participación parlamentaria. La intención es evitar que el Ejecutivo acumule control exclusivo sobre las designaciones, asegurando contrapesos democráticos y legitimidad política al órgano. Se propone que el Consejo sea técnicamente robusto, pero políticamente equilibrado, con mandatos renovables cada cuatro años que impulsen continuidad sin vulnerar cambios de mayoría.

A lo largo de las audiencias realizadas en la Comisión, se ha convocado al Dr. Ricardo Baeza-Yates, especialista en inteligencia artificial, quien expuso sobre cómo dotar a la agencia de capacidades técnicas modernas que le permiten anticipar tendencias tecnológicas fundamentales. Expuso la necesidad de que el cuerpo técnico pueda incorporar modelamientos de escenarios complejos, y criticó la concepción preliminar por su enfoque demasiado rígido e institucional, sin flexibilidad para innovar en metodologías. También intervinieron gremios productivos, representantes de regiones y expertos del mundo académico que enfatizaron la

urgente integración de agendas regionales y productivas. En forma paralela, se apuntó a que el concepto de “prospectiva” deberá ser cuidadosamente delimitado y operativizado, ya que no basta con un nombre técnico; algunos Senadores plantearon que “estrategia” comunica mejor su propósito al público y a los tomadores de decisión.

Políticamente, en la Sala hay señales mixtas: Una parte del oficialismo respalda la propuesta como parte de la agenda de modernización del Estado, mientras otros advierten que, sin los ajustes señalados, esta institucionalidad podría convertirse en un aparato oneroso y rígido. Desde la oposición se ha dicho que apoyan en general la iniciativa, pero condicionan su avance a las indicaciones que garanticen efectividad, independencia técnica y participación múltiple en la toma de decisiones. Se ha explicado que solo con esas modificaciones la Agencia podrá aspirar a ser una herramienta de Estado en vez de un mero anexo administrativo.

Legalmente, algunos asesores legislativos han señalado que el proyecto requiere mayor precisión en sus facultades normativas y vinculatorias. Se ha observado que las referencias al carácter “vinculante” de las recomendaciones requieren un respaldo jurídico más explícito que ayude a prevenir ambigüedades frente a eventuales conflictos entre poderes. Asimismo se ha propuesto reforzar las garantías de imparcialidad, por ejemplo, mediante la inclusión de causales de recusación o incompatibilidades de quienes integren el Consejo, especialmente si provienen del mundo político o tienen vínculos empresariales. Estas reflexiones se enmarcan en criterios de derecho administrativo moderno, que persiguen la transparencia y la independencia de órganos técnicos frente a influencias políticas directas.

Así, se enfatiza la urgencia de contar con una institucionalidad que permita respaldar políticas públicas estratégicas y dar continuidad a orientaciones de seguridad, orden público y desarrollo productivo. En paralelo, se insiste en que esa urgencia no puede justificar un diseño institucional débil, sin independencia ni mecanismos de control. Se respaldan aquellas indicaciones que apuntan a reducir la dimensión del Consejo, garantizar alternancia, limitar la capacidad del Ejecutivo para nombrar sin consulta e incorporar miembros nominados por parlamentarios de oposición, asegurando paridad y legitimidad democrática. Desde esta perspectiva, esto fortalece el rol operativo de las fuerzas de seguridad y las instituciones del Estado, al dotarlas de proyecciones confiables y adversarialmente sólidas, capacidades que el país necesita si aspira a enfrentar riesgos estructurales con antelación y con respaldo técnico-jurídico.

Esta visión también se hace eco en las voces expertas escuchadas: Desde centros de estudios especializados en prospectiva, quienes han pedido darle mayores capacidades al equipo técnico en modelación, análisis de big data y estudios territoriales; exministros como Bitar y Couve que han reiterado que Chile requiere un instrumento de Estado con mirada económica, social y estratégica; así como gremios productivos del norte y sur que han pedido orientar la labor de la Agencia hacia planificación regional y diversificación productiva. Todos estos aportes confluyen en la idea de que el proyecto debe transformarse en un verdadero timón estatal, con objetivos claros, independencia técnica real y legitimidad política transversal.

En síntesis, el debate legislativo articula una tensión entre la necesidad de institucionalizar la planificación de Estado y el riesgo de centralizar el poder en el Ejecutivo o limitar su alcance disciplinar. La visión ha de estar alineada con la aprobación del proyecto en general, valorando su propósito estratégico y su utilidad para dotar al Estado de capacidades anticipatorias robustas, en especial en materia de seguridad y desarrollo. Al mismo tiempo que se promueven modificaciones necesarias para garantizar que la nueva institucionalidad sea autónoma, técnicamente moderna, política e institucionalmente equilibrada, y con un Consejo compuesto de forma eficiente pero plural. Su prioridad es dotar al país de una herramienta de planificación de largo plazo que no dependa de mayorías circunstanciales, sino que tenga estructura legal, equilibrio institucional y proyección estratégica sustentable.

**MINUTA PROYECTO LEY QUE MODERNIZA EL SISTEMA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SALUD, FORTALECE EL FONDO NACIONAL DE SALUD,
CREA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DIGITAL Y OTORGA NUEVAS
FACULTADES AL ISP Y A CENABAST**

La discusión que se desarrolla en estas semanas en el Senado sobre el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud ha ocupado buena parte de la agenda legislativa, tanto en la Comisión de Salud como en las sesiones de Sala, debido al alcance y complejidad de la iniciativa que, en su contenido, no solo apunta a reorganizar funciones y atribuciones de los principales organismos públicos del sector, sino que también busca introducir transformaciones de fondo en la manera en que el Estado se relaciona con los usuarios del sistema y administra recursos críticos. El proyecto propone fortalecer estructuralmente al Fondo Nacional de Salud (FONASA), crear un Servicio Nacional de Salud Digital que unifique y modernice los procesos de gestión tecnológica del sector, otorgar nuevas facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), además de redefinir aspectos operativos y de fiscalización que hoy se encuentran dispersos o limitados. El Ejecutivo ha planteado esta iniciativa como parte central de su agenda de reformas en salud pública, destacando la necesidad de dar respuesta a un sistema que muestra signos de obsolescencia frente a la demanda creciente, los desafíos de financiamiento y la incorporación de nuevas tecnologías en la atención sanitaria.

Desde el inicio del debate en Comisión se ha hecho patente que el proyecto, aunque reconocido transversalmente como una reforma necesaria, enfrenta tensiones significativas respecto de su diseño institucional y de las facultades que se pretende otorgar a los distintos organismos que integran el sistema. Uno de los ejes que ha suscitado mayor discusión dice relación con la estructura del gobierno corporativo de FONASA. El proyecto contempla un rediseño que busca dotarlo de un directorio con atribuciones más amplias y con un perfil eminentemente técnico, incorporando criterios de paridad y representación de usuarios. Sin embargo, Senadores de oposición y también algunos del oficialismo han advertido que esta fórmula podría replicar un esquema excesivamente centralizado, en que las decisiones críticas sobre financiamiento y priorización de recursos se mantendrían concentradas en el Ejecutivo sin los contrapesos necesarios. Asimismo, se ha subrayado la importancia de asegurar que este fortalecimiento de FONASA no derive en una politización de su gestión, sino que se configure como un organismo con autonomía técnica y con mecanismos de control parlamentario claros, que permitan fiscalizar su funcionamiento y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

Otro aspecto de alta controversia ha sido el tratamiento de las licencias médicas, particularmente en lo relativo a la incorporación de la cobertura de enfermedades del hijo menor, que el proyecto aborda ampliando facultades de supervisión y control para el propio FONASA. Si bien la medida busca simplificar trámites y reducir abusos en la emisión de licencias, se ha abierto un debate respecto de los límites de esa supervisión y el impacto que puede tener en los derechos de los trabajadores. Expertos en derecho laboral han advertido que cualquier cambio en la fiscalización de licencias debe garantizar el debido proceso y la transparencia en la evaluación de causales, evitando que los usuarios enfrenten procesos engorrosos o discrecionalidad en las resoluciones. El Ejecutivo ha defendido que esta modernización permitirá reducir significativamente las demoras actuales, mejorando la trazabilidad y el control digital de las licencias. Sin embargo, se ha advertido en que el rediseño debe acompañarse de un refuerzo en los mecanismos de apelación y de un estándar uniforme para todo el sistema, con indicadores claros de calidad en la resolución de estas solicitudes.

La creación del Servicio Nacional de Salud Digital constituye otra de las aristas centrales del proyecto y, al mismo tiempo, una de las más discutidas. La iniciativa plantea unificar las plataformas tecnológicas dispersas en el sistema público y avanzar hacia la interoperabilidad de datos clínicos y administrativos. No obstante, la propuesta del Gobierno ha sido criticada por su alcance limitado y por la falta de una visión integral de salud digital. En las audiencias de Comisión, el exministro Jaime Mañalich advirtió que el proyecto resulta obsoleto desde su concepción, pues se focaliza en la telemedicina y en procesos básicos de digitalización, sin considerar los desafíos actuales en inteligencia artificial, ciberseguridad o analítica avanzada de datos clínicos. A esta crítica se sumaron académicos y especialistas en innovación en salud que señalaron que, para que el Servicio Digital sea efectivo, debe diseñarse con una gobernanza robusta, con atribuciones claras para coordinarse con los servicios de salud regionales y con estándares de seguridad que resguarden adecuadamente los datos personales de los pacientes. En línea con estas observaciones, se ha planteado la necesidad de que el nuevo servicio no se convierta en una burocracia adicional, sino que cumpla un rol articulador y eficiente, evitando duplicidades y fortaleciendo la capacidad del Estado para anticipar y gestionar emergencias sanitarias.

Vinculado a lo anterior surge el debate sobre la transformación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). El proyecto propone trasladar parte de sus funciones al nuevo Servicio de Salud Digital, con la expectativa de modernizar procesos y reducir tiempos de tramitación. Sin embargo, gremios de trabajadores de la salud y parlamentarios de diversas bancadas han advertido que esta transición

puede generar un problema de continuidad en la atención y una sobrecarga operativa, en particular durante la etapa inicial de implementación. Las audiencias con representantes de trabajadores y colegios profesionales han evidenciado el temor a una burocratización de los procesos y a que la digitalización, mal ejecutada, termine profundizando las brechas ya existentes en regiones con menor conectividad. En este punto se ha destacado la necesidad de que la reforma contemple una estrategia de capacitación y un plan gradual de implementación que asegure la operación continua del sistema sin perjudicar a los usuarios.

La transparencia y rendición de cuentas en la compra centralizada de medicamentos y suministros ha sido otra materia que ha polarizado la discusión. El fortalecimiento de la CENABAST es visto como un avance indispensable para lograr economías de escala y reducir el gasto público en medicamentos. No obstante, senadores y expertos en políticas públicas han insistido en que la centralización de las compras debe ir acompañada de mecanismos de auditoría robustos y de trazabilidad pública de cada licitación. Se ha propuesto que todas las adquisiciones se publiquen en plataformas abiertas, con indicadores periódicos de desempeño y con la obligación de informar no solo precios unitarios sino también niveles de disponibilidad y tiempos de entrega. La discusión en torno a este punto ha puesto sobre la mesa experiencias pasadas en que deficiencias en la gestión de abastecimiento afectaron la entrega oportuna de medicamentos críticos, especialmente en regiones extremas y en hospitales de alta complejidad.

El fortalecimiento del Instituto de Salud Pública (ISP) también figura como componente central de la reforma. Se plantea dotarlo de mayores facultades para regular dispositivos médicos y productos farmacéuticos, así como para fiscalizar ensayos clínicos y procesos de innovación terapéutica. Expertos del ámbito académico y representantes de la industria han coincidido en la necesidad de robustecer la capacidad técnica del ISP, pero advierten que ello debe ir acompañado de recursos humanos especializados y de un marco normativo que le permita actuar con agilidad frente a emergencias sanitarias. En la Comisión se ha debatido, además, la conveniencia de establecer un sistema de indicadores que midan el desempeño del ISP y su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo sanitario, algo que ha sido respaldado por organizaciones de pacientes y centros de investigación en salud.

En lo jurídico, la discusión ha girado en torno a las facultades que el proyecto confiere a los nuevos órganos y su compatibilidad con las competencias actuales del Ministerio de Salud y de los Servicios de Salud regionales. Abogados expertos en derecho administrativo han planteado que es indispensable clarificar los mecanismos de coordinación y la jerarquía normativa para evitar conflictos de

atribuciones que puedan generar ineficiencias o vacíos en la prestación de servicios. La Comisión ha revisado indicaciones que buscan delimitar expresamente las funciones del nuevo Servicio Nacional de Salud Digital, asegurando que su rol sea de coordinación y soporte, sin reemplazar las funciones de los servicios regionales. En esta línea, se ha propuesto crear una instancia de fiscalización interna con participación de la Contraloría y de comités técnicos independientes que permitan evaluar el cumplimiento de objetivos y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

La urgencia por fortalecer la gobernanza y la evaluación ministerial ha sido un argumento reiterado tanto por parlamentarios como por expertos del sector. Se ha señalado que cualquier modernización del sistema debe ir acompañada de indicadores claros de desempeño y de un marco de evaluación que permita al Congreso y a la ciudadanía conocer periódicamente el grado de avance y los resultados alcanzados. En este sentido, centros de estudio como el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) han planteado la importancia de que el proyecto incluya metas concretas en materia de reducción de tiempos de espera, mejora en la entrega de medicamentos y cobertura efectiva de licencias médicas. Estas metas, a su juicio, deben ser obligatorias y su cumplimiento reportado al Parlamento en plazos regulares.

Desde el punto de vista político, el proyecto ha recibido un respaldo en general por parte de la mayoría de las bancadas, aunque con matices importantes. El oficialismo defiende la reforma como una actualización necesaria para enfrentar los desafíos del sistema público de salud, subrayando que la digitalización y el fortalecimiento de FONASA y CENABAST son esenciales para mejorar la eficiencia y la equidad. La oposición, en tanto, ha mostrado disposición a aprobar la iniciativa, pero condicionando su apoyo a que se introduzcan ajustes que aseguren independencia en la gestión de FONASA, mecanismos claros de fiscalización en las compras públicas y garantías de que el nuevo servicio digital no se convertirá en un aparato burocrático costoso e ineficiente. Se ha enfatizado que, si bien se valora el esfuerzo del Ejecutivo por modernizar el sistema, es indispensable corregir los vacíos de gobernanza y asegurar que los cambios propuestos fortalezcan la capacidad operativa del Estado sin generar nuevas capas de administración que terminen afectando la respuesta a los usuarios.

En pleno julio, el proyecto se encuentra en una fase de discusión intensa en la Comisión de Salud, donde se revisan indicaciones que buscan perfeccionar aspectos sensibles como el gobierno corporativo de FONASA, la definición del rol del Servicio Nacional de Salud Digital y la regulación de las licencias médicas. Se espera que estas semanas sean decisivas para alcanzar un texto que pueda concitar un apoyo

transversal y que, en su paso a la Sala, logre mantener los equilibrios necesarios entre modernización, control democrático y eficiencia operativa. La expectativa es que el debate permita no solo actualizar las estructuras del sistema de salud, sino también sentar las bases para un modelo de gestión pública más transparente, coordinado y preparado para enfrentar los desafíos que impone el futuro sanitario del país.